

# Anexo B

---

## EXPEDIENTES AGRUPADOS POR UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS



## B. EXPEDIENTES AGRUPADOS POR UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS

- 217.001 ciudadanos acompañan con sus firmas el escrito de la entidad compareciente, y solicitan la celebración de un referéndum para reformar la Constitución española, con el fin de que en su articulado se recoja la obligación de mantener el poder adquisitivo real de las pensiones.
- 10.847 ciudadanos manifiestan su malestar por el cambio de trazado del AVE Antequera-Granada.
- 9.501 interesados, entre los que se encuentran varias organizaciones sindicales del ámbito de la Comunidad de Madrid, presentan queja por la exclusión de las enseñanzas de formación profesional de grado superior, de la convocatoria para la renovación de los conciertos educativos, publicada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, de la Comunidad de Madrid
- 9.114 ciudadanos se dirigen al Defensor del Pueblo para manifestar su desacuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En particular, respecto a los recortes presupuestarios que afectan al personal al servicio de las administraciones públicas.
- 1.879 ciudadanos plantean su preocupación por la falta de cobertura de las plazas que quedan vacantes en la Residencia (social asistida) San José, de Toledo, dependiente de la Diputación Provincial.
- 1.501 ciudadanos se quejan por la paralización de las obras de ampliación de las instalaciones de un colegio de educación infantil y primaria (CEIP) de la localidad de El Boalo (Madrid), dirigidas a la construcción de los espacios necesarios para la implantación de enseñanzas de educación secundaria obligatoria.
- 1.454 ciudadanos reclaman por la supresión del punto de atención continuada (servicio de urgencias sanitarias de 22 a 8 horas) en el municipio de Librilla (Murcia).

- 1.120 ciudadanos solicitan que no se considere la dación en pago de una vivienda como una venta, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- 1.022 ciudadanos remiten un escrito en apoyo de la unidad terapéutica y educativa del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias), y solicitan la actuación de oficio de la institución del Defensor del Pueblo.
- 812 ciudadanos, productores de energía fotovoltaica, manifiestan su disconformidad con las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, por estimar que incide de nuevo, negativamente, en los productores de este tipo de energía. Alegan la inseguridad jurídica que les produce el continuo cambio de las normas reguladoras del sector, siempre en detrimento de estos productores
- 790 reclamantes solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (véase anexo E.5).
- 665 ciudadanos reclaman contra la decisión de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., de modificar, sin previo aviso, las condiciones de contratación y clasificación de la correspondencia destinada a apartados de correos en Mojácar (Almería).
- 513 ciudadanos muestran su disconformidad con el cierre parcial del punto de atención continuada (servicio de urgencias de 22 a 8 horas) en el municipio de Muelas del Pan (Zamora).
- 409 ciudadanos, residentes en la localidad de Mandayona (Guadalajara), reclaman por la reducción del horario de asistencia sanitaria de 5 a 3 días en el centro médico de la localidad.
- 294 trabajadores, pertenecientes a una de las empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), manifiestan su disconformidad con la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, con motivo de la aplicación

del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

- 285 personas manifiestan su disconformidad con la venta de participaciones preferentes, sin la oportuna información por parte de su entidad financiera.
- 275 empleados de la Comunidad de Madrid, en su condición de técnicos y especialistas en las materias sobre las que tiene incidencia la disposición legal, solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de viviendas rurales sostenibles (véase anexo E.5).
- 228 ciudadanos denuncian el inminente cierre del Centro Ocupacional de Espinardo (Murcia) para personas con discapacidad.
- 227 ciudadanos, entre los que se encuentran numerosos funcionarios del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dirigen a esta Institución expresando su apoyo a la previsión incorporada en el Decreto-ley 5/2013, de 2 de abril, en relación con el empleo del personal funcionario interino de la Junta de Andalucía, y su oposición a la solicitud de interposición de recurso, por considerar la norma citada plenamente constitucional (véase anexo E.5).
- 217 ciudadanos manifiestan su disconformidad con la transferencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los medios personales, materiales y económicos del Hospital Provincial Nuestra Señora de la Misericordia y de la Unidad de Conductas Adictivas, dependientes de la Diputación Provincial de Toledo.
- 191 ciudadanos, pertenecientes a una asociación de prejubilados y jubilados de ámbito autonómico, muestran su discrepancia con la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la actualización de las pensiones para el ejercicio 2012, y de suspender su revalorización para el ejercicio 2013, en función del correspondiente índice de precios de consumo, y solicitan del Defensor del Pueblo la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del Sistema de la Seguridad Social (véase anexo E.5).
- 186 ciudadanos, pertenecientes a una asociación de madres y padres de alumnos de un instituto de educación secundaria de la localidad de Alcobendas (Madrid), cuestionan la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid, de

eliminar las enseñanzas de bachillerato del mencionado centro, a partir del próximo curso académico 2013-2014.

- 158 padres y madres, residentes en la Comunitat Valenciana, expresan su malestar por el retraso en el pago del importe de la ayuda para adquisición de libros de texto concedida a sus hijos.
- 152 empleados públicos, que prestan servicios en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, exponen ante el Defensor del Pueblo las importantes modificaciones que han afectado a su situación jurídico-administrativa y retributiva, tras la reversión a la Administración del Estado de los medios personales y materiales en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir.
- 146 ciudadanos, pertenecientes a la Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados, manifiestan su disconformidad con la decisión del Consejo Superior de Deportes de retirar la categoría de especialidad deportiva al Aikido.
- 139 aspirantes a ocupar plazas como maestros interinos en educación infantil y primaria, que han venido desempeñando desde hace tiempo sus labores docentes al servicio de la Comunidad de Madrid, se quejan de que las titulaciones que les habilitan han sido excluidas de la Resolución por la que se regula la participación, composición y ordenación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en el cuerpo de maestros para el curso escolar 2013-2014.
- 109 ciudadanos exponen su desacuerdo con el límite de edad establecido para el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil y solicitan la intervención del Defensor del Pueblo para que sea modificado.
- 81 reclamantes solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en relación con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears (véase anexo E.5).
- 80 ciudadanos exponen su disconformidad sobre la revisión y modificación de los tipos de interés para los préstamos cualificados y convenidos, concedidos en el marco de los Programas de Viviendas con Protección Oficial.

- 77 ciudadanos denuncian irregularidades, acontecidas en el 4º ejercicio de la oposición a 220 plazas a Bombero Especialista del Ayuntamiento de Madrid.
- 75 ciudadanos se quejan de la situación en la que se encuentra el Centro de atención integral a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas (CADIG) de La Solana (Ciudad Real), debido a la falta de pago, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de las cantidades previstas en el convenio correspondiente a 2011, y todo lo comprometido en el convenio de 2012.
- 73 ciudadanos, prestatarios de pólizas de préstamo universitarios, en la modalidad Línea ICO–Préstamo Renta Universidad, concedidos en 2011 para realizar estudios de posgrado de máster y de doctorado, manifiestan que las entidades bancarias han activado la amortización de los préstamos, cargando en muchos casos cantidades de hasta 300 euros a jóvenes que están desempleados o percibiendo rentas inferiores a 22.000 euros anuales, por lo que se ven imposibilitados para pagar.
- 70 ciudadanos se manifiestan contra la retransmisión de festejos taurinos por parte de Televisión Española, en el horario infantil.
- 68 trabajadores de una empresa de transporte, centro de trabajo de Vallecas (Madrid), reclaman el amparo del Defensor del Pueblo ante el proceso de despido colectivo en que se encuentran.
- 59 personas formulan queja, ante la falta de tramitación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Básica de Cámaras de Comercio, previsto para el ejercicio 2012.
- 58 ciudadano solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, en relación con la reducción de la jornada de trabajo de los funcionarios interinos y del personal laboral indefinido y temporal del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias (véase anexo E.5).
- 53 personas, pertenecientes a asociaciones ciudadanas, formulan una queja por la actuación de varios agentes de la Policía Nacional, destinados en la

Comisaría del Congreso de los Diputados, el pasado 16 de octubre de 2013, con motivo del acceso a la Tribuna de invitados.

- 46 personas manifiestan su disconformidad con el proyecto de reestructuración del Servicio de Emergencias Sanitarias en la provincia de Valencia, lo que, según los reclamantes, conllevaría la reducción de recursos y aumentaría los tiempos de respuesta asistencial del mencionado servicio.
- 44 personas exponen su disconformidad con la supresión de las ayudas a la subsidiación de préstamos, que cobró efectos desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- 43 ciudadanos, padres y madres de alumnos residentes en distintas localidades de la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara), se quejan por las dificultades que está generando para los alumnos y sus familias la huelga convocada por los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de transporte escolar en la citada comarca.
- 37 ciudadanos solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía (véase anexo E.5).

